

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019).

**Radicación:** 110013335 009 2015 00198 00  
**Demandante:** Nohora Beatriz Acosta de Velásquez  
**Demandado:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

---

**EJECUTIVO**

(Repone, declara la caducidad)

El Despacho procede a decidir el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 04 de marzo de 2019, por el apoderado de la entidad ejecutada, mediante el cual se libró orden de pago.

El recurrente alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque el acto administrativo que dio cumplimiento al fallo fue expedido por la extinta CAJANAL y los intereses moratorios estarían a cargo de dicha entidad y no de la UGPP, la cual únicamente es competente para el pago de las mentadas obligaciones siempre que se tenga que modificar el derecho reconocido en el acto administrativo de cumplimiento.

Por otra parte, adujo la caducidad de la acción ejecutiva como quiera que en los casos de fallos contra CAJANAL ejecutoriados con anterioridad al 24 de agosto de 2009, y que los titulares no presentaron su reclamación dentro del término establecido por el liquidador de la mentada entidad para efectuar las reclamaciones de acreencias pendientes, esto es entre el 24 de agosto al 24 de septiembre de 2009.

Conforme con ello, perdieron la oportunidad legal para reclamar el pago de los intereses, por consolidación del fenómeno jurídico de la caducidad y por ende la extinción del derecho de acción por el paso del tiempo, toda vez que la ejecutante dejó transcurrir los plazos fijados por la ley, razón por la cual el derecho fenece no porque no hubiere existido sino porque no es posible reclamarlo en juicio.

Ejecutivo

Expediente: 110013335 009 201500198 00

Demandante: Nohora Beatriz Acosta De Velásquez

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Hizo alusión a la decisión contenida en el Acta del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la ejecutada nro. 609 del 26 de noviembre de 2014, ratificada en el Comité del 24 de junio de 2016.

Frente a la inembargabilidad, adujo que los dineros depositados en las cuentas de la UGPP tienen una destinación específica a la seguridad social, protegida por la Constitución y la jurisprudencia, razón por la cual solicitó no se decreta medida cautelar de embargo.

Previamente a resolver, el despacho hace las siguientes,

### CONSIDERACIONES

Sobre las razones de inconformidad contra el mandamiento de pago:

**1.- Falta de legitimación en la causa.-** En efecto, la UGPP dice no estar legitimada para ser demandada en este proceso y pagar los intereses moratorios, no obstante, tal posición ha sido ampliamente debatido por el Tribunal Administrativo<sup>1</sup> y el Consejo de Estado<sup>2</sup>, en el entendido de que, con la extinción de CAJANAL EICE, el 12 de junio de 2013, se estableció su sustitución por la UGPP, como entidad que por ley la sucedió, en los derechos y en las obligaciones, incluido el régimen pensional, por lo que opera la sucesión procesal, incluido cumplir las sentencias judiciales.

Los intereses son una consecuencia legal, una sanción<sup>3</sup> prevista para el incumplimiento de la obligación principal, en el caso para el no pago oportuno de la condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sentencia ejecutoriada y vencido el plazo para hacerlo.

La conclusión de los órganos de la jurisdicción, con igual criterio al que se aplica en la cosa juzgada sobre identidad jurídica de partes<sup>4</sup>, pues aquí jurídicamente es la misma parte, hace desestimable esta excepción.

**2.- Caducidad de la acción ejecutiva.-** Esta excepción, en cuanto parte de reconocer el derecho pero aduce su extinción, motivo por el que, a su

<sup>1</sup> Tribunal Administrativo de Cundinamarca (19 de enero de 2017. M.P Dr. José María Armenta Fuentes- Rad. 2015-0688) (9 de febrero de 2017. M.P Dr. Israel Soler Pedraza- Rad 2015-0175) (20 de abril de 2017. M. Samuel José Ramírez Poveda) (01 de junio de 2017 M.P Dr. Luis Alberto Álvarez Parra - Rad. 2015-0476)

<sup>2</sup> Concepto de la Sala de Consulta y servicio Civil - 19 de agosto de 2015- rad. 11001-03-06-000-2015-00066-000

<sup>3</sup> Art. 6 C. C.

<sup>4</sup> Art. 303 CGP.

Ejecutivo

Expediente: 110013335 009 201500198 00

Demandante: Nohara Beatriz Acosta De Velásquez

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

juicio, no es posible reclamarlo en el proceso, hace necesario abordar la figura jurídica propuesta.

El artículo 177 del CCA, código vigente para cuando se expidió la sentencia, establece:

<<Art. 177.- **Efectividad de condenas contra entidades públicas.** Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada.

(...)

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.>> (Subrayas del despacho).

En cuanto a la oportunidad para deprecar la ejecución o caducidad propiamente dicha, el artículo 136 del CCA norma en cuya vigencia empezó a contarse el plazo<sup>5</sup>, precisa:

<<Artículo 136. *Modificado por art. 23 Decreto 2304 de 1989 y por el art. 44 Ley 446 de 1998.*

(...)

11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.>> (Subrayas del despacho).

Entonces, después de los 18 meses para la exigibilidad (ART. 177 CCA) procede iniciar el conteo de los 5 años previstos para la caducidad.

Sin embargo, el término de la caducidad puede ser objeto de suspensión, por cuatro -4- años, como está previsto en los decretos de liquidación de

<sup>5</sup> Ver arts. 266 CCA y 308 CPACA.

Ejecutivo

Expediente: 110013335 009 201500198 00

Demandante: Nohora Beatriz Acosta De Velásquez

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

la entidad<sup>6</sup>, lo que ha sido objeto de pronunciamientos por el Consejo de Estado, como se verá a continuación.

Advierte la jurisprudencia que, para que opere la suspensión del plazo de caducidad, es una exigencia la existencia de cierta diligencia, solo así puede cobrar a la UGPP las obligaciones pensionales provenientes de una condena por sentencia judicial a CAJANAL EICE.

Por la claridad de la jurisprudencia, en cuanto a que solo si se presentó ante CAJANAL EICE en Liquidación la reclamación para el pago, antes del 8 de noviembre de 2011 (Decreto 4269 de 2011), se puede continuar contra la UGPP como sucesora, para que no operara la caducidad<sup>7</sup>, se transcribe la parte pertinente:

<<Así las cosas, si bien en decisiones recientes de la Secciones Segunda y Cuarta de esta Corporación se señaló que la caducidad frente a sentencias de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN se suspendió durante los cuatro (4) años que duró su trámite liquidatorio, ello solo resulta aplicable a aquellos casos con características especiales analizadas en ellos en los cuales se impidió que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación contra CAJANAL o la UGPP.

Por el contrario, la anterior regla no puede ser aplicada frente a los fallos condenatorios ejecutoriados y/o cuyas peticiones de cumplimiento se radicaron con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, en tanto que: a. Frente a ellas solo puede operar la suspensión del término de caducidad hasta el 8 de noviembre de 2011, momento hasta el cual sólo era viable acudir ante CAJANAL EN LIQUIDACIÓN para tal efecto. b. A partir de esa fecha la obligación de satisfacer el crédito recayó legalmente en la UGPP, conforme lo dispuso el Decreto 4269 de 2011 y las personas estaban habilitadas legalmente para ejecutar las condenas en contra de la UGPP. c. Por ello, tampoco resultaría proporcional para el Estado deudor el extender los efectos de suspensión de la caducidad por cuatro años, como sí sucede con los casos anteriores.

De esta forma, es necesario que el juez identifique a partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento ante CAJANAL o UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de medio de control se suspenderá sólo a partir del momento en que inició el período liquidatorio de CAJANAL EICE y se reactivará: a. El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y compete atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 o, b. Para aquellas obligaciones

<sup>6</sup> Entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013 (Decreto 2196 de 2009 y Ley 550 de 1999) y sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, de 26 de abril de 2018, radicado 76001-23-33-000-2016-01765-01(4072-17), actor Nardelly Giraldo de Álvarez, demandado UGPP.

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C. P. William Hernández Gómez, 30 de junio de 2016, radicado 25000-23-42-000-2013-06595-01(3637-14), actor Luis Francisco Estévez Gómez, demandado UGPP.

**Ejecutivo****Expediente:** 110013335 009 201500198 00**Demandante:** Nohora Beatriz Acosta De Velásquez**Demandada:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

cuya petición de cumplimiento correspondía atender a CAJANAL en liquidación, conforme el mismo decreto, la reactivación será el 12 de junio de 2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP<sup>8</sup>,>>

Entonces, para saber si se suspendió o no el plazo de caducidad y poder sumar a los dieciocho meses de exigibilidad, los cuatro años de suspensión, más los cinco de caducidad, se debe verificar la satisfacción de lo establecido por la jurisprudencia.

En este caso la sentencia que se pretende ejecutar está ejecutoriada, desde el 2 de septiembre de 2008, conforme la constancia secretarial, (folio 13 vuelto).

Como la jurisprudencia, de lo cual es ejemplo la citada anteriormente, estableció que la suspensión de la caducidad opera o es aplicable si se satisface la condición que depende por una parte de **a partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento ante CAJANAL o UGPP**, y por otra parte esa **características especial que impidió que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación**, es decir, con la demanda la parte tiene esa carga procesal probatoria, consistente en demostrar que realizó el cobro, ante el liquidador y/o ante el liquidador de la entidad y pese a ello no pudo hacer efectiva la obligación, se le **impidió la satisfacción del crédito**.

En el presente caso no se aportó prueba alguna destinada a demostrar dicho requisito para que operar la suspensión de la caducidad y, como no operó, entonces concluye el despacho que no hubo dicha suspensión, transcurrió ordinariamente el plazo correspondiente.

Así la cosas, los 18 meses para la exigibilidad de la obligación del 2 de septiembre de 2008 venció el 3 de marzo de 2010 y los 4 años siguientes o contados a partir de esta fecha se cumplieron el 3 de marzo de 2014.

Esta demanda fue presentada el 17 de diciembre de 2014<sup>9</sup>, fecha posterior al vencimiento del plazo legal para la caducidad, es decir, cuando había perdido el derecho de acción para proceso ejecutivo por

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> Según consulta efectuada en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI dentro del expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 2008-00059.

Ejecutivo

Expediente: 110013335 009 201500198 00

Demandante: Nahora Beatriz Acosta De Velásquez

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

tal fenómeno procesal que impide adelantar cualquier trámite jurisdiccional.

En consecuencia el despacho declarará que operó la caducidad.

**3.- Inembargabilidad de las cuentas de la UGPP.-** Esta excepción no se tiene que estudiar porque la parte actora no solicitó medida cautelar.


En mérito de lo expuesto el despacho.

#### RESUELVE

**PRIMERO: REPONER** el auto de 04 de marzo de 2019 en los términos solicitados por la parte ejecutada y declarar que operó la **CADUCIDAD** para adelantar el proceso ejecutivo derivado de sentencia de este Despacho contra la liquidada **CAJANAL EICE**.

**SEGUNDO:** Reconocer personería adjetiva al abogado **Jorge Fernando Camacho Romero** identificado con cédula de ciudadanía 79.949.833, portador de la tarjeta profesional 132.448 del C. S. de la J., como apoderado de la parte demandada, conforme a las facultades otorgadas en la escritura pública obrante a folios 118 a 140 del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**GUILLERMO POVEDA PERDOMO**  
 Juez

SCVE

**JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO  
 JUDICIAL DE BOGOTÁ DC, SECCIÓN SEGUNDA**

#### NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **ONCE (11) DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

**SARA CRISTINA VILLOTA ESCANDÓN**  
 Secretaria